



OBSERVATORIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

Revista

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe · IEALC

ISSN 1853-2713

<https://publicaciones.sociales.uba.ar/observatoriolatinoamericano/>

Volumen 3 · Número 1 (enero-junio, 2019)

Condiciones políticas y disputas ideológicas en la consolidación del “neoliberalismo avanzado” chileno en la postdictadura

Sebastián Caviedes Hamuy

RECIBIDO: 22 de abril de 2019

APROBADO: 25 de junio de 2019

Condiciones políticas y disputas ideológicas en la consolidación del “neoliberalismo avanzado” chileno en la postdictadura

Sebastián Caviedes Hamuy
Universidad de Chile
caviedioh@gmail.com

Resumen

Partiendo de la tipología que sitúa a la experiencia neoliberal chilena como la más avanzada de la región, se indaga en las condiciones políticas e ideológicas que consolidan esta forma de capitalismo en la postdictadura, más allá de la herencia privatizadora entablada durante el régimen de Pinochet. Considerando fuentes documentales diversas, se sostiene que la oportunidad política para ello surge como resultado tanto de la colonización empresarial de las élites de la Concertación —la alianza opositora que encabeza la democratización— como del abrupto cierre del debate sobre la redefinición del proyecto histórico de esta coalición a fines de los noventa.

Palabras clave: *Neoliberalismo - intelectuales - empresariado - Estado - Chile*

Abstract

Starting from the typology that situates the Chilean neoliberal experience as the most advanced in the region, it investigates the political and ideological conditions that consolidate this form of capitalism in the post-dictatorship, beyond the privatization inheritance established during the Pinochet regime. Considering diverse documentary sources, it is argued that the political opportunity for this arises as a result both of the business colonization of the elites of the Concertación —the opposition alliance that heads democratization— and of the abrupt closure of the debate on the redefinition of the historical project of this coalition in the late nineties.

Keywords: *Neoliberalism - intellectuals - entrepreneurs - State - Chile.*

Introducción: Notas sobre el “neoliberalismo avanzado” chileno

El desembarco del neoliberalismo, como intento de refundación capitalista, es un hecho generalizado en América Latina desde los años noventa (Ruiz, 2019). Tras la inestable década previa, la puesta en marcha de un decálogo de medidas de ajuste estructural, de apertura y financierización, conocido como el Consenso de Washington, inicia este ciclo. Las excepciones son Chile y Bolivia, en los que ya se producen giros neoliberales desde mediados de los años setenta y ochenta, respectivamente, aunque de índole muy distinta.

Precisamente esto último, el nivel de profundidad que alcanza la refundación capitalista en cada país, obliga a tratar al neoliberalismo como un fenómeno disímil en sus grados de avance en la región latinoamericana. En todos los países cambia de algún modo la fisionomía de las alianzas sociales dominantes y las formas en que se presenta el conflicto social, se tuerce la orientación del Estado y se despliegan nuevos marcos ideológicos. Pero

no en todos tales transformaciones, respecto al ciclo nacional-popular previo, alcanzan la misma profundidad. Es por ello por lo que, siguiendo al sociólogo Carlos Ruiz Encina, es posible distinguir un “neoliberalismo avanzado” en el caso chileno, en contraste con las experiencias argentina, venezolana o la propia boliviana, en que se aprecian tendencias que revierten algunos de los avances iniciales del proceso neoliberal; o, como ocurre en Brasil y, en menor medida, en Uruguay y Ecuador, con experiencias cuyo giro se basa en acuerdos sociales que combinan reformas neoliberales y mecanismos de protección. Sólo México, Colombia y Perú pueden acercarse a la experiencia chilena, pues allí también no son retomados los viejos mecanismos de procesamiento institucional de los conflictos sociales, propios del denominado “Estado de Compromiso”, ni las formas típicas de participación de la etapa nacional-popular, concentrándose el conflicto en torno a cómo los grupos subalternos resisten una exclusión estatal creciente (Ruiz y Bocco, 2015).

Pese a ello, es solamente en Chile donde el giro neoliberal produce una transformación total de la estructura y conflicto social, así como de la dinámica política precedente. La clave de tal profundidad radica no sólo en el tiempo de duración que alcanza este ciclo histórico —completando más de cuatro décadas—, sino en el tipo de rupturas que implica su proyección hasta el presente. Efectivamente, si a la base de cualquier variante de giro neoliberal en la región se encuentran el avance y permanencia de los cursos de privatización de las empresas públicas del desarrollismo latinoamericano, el “neoliberalismo avanzado” implica, además, la presencia de un segundo ciclo de privatizaciones, enfocado esta vez en el sistema de servicios sociales originado en los procesos de democratización fundamental que caracterizaron a la etapa nacional-popular (Ruiz, 2015). Un nivel de mercantilización de la vida social que alcanza incluso a antiguos derechos sociales, como ocurre con los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad social e, incluso, la vivienda.

Tales cursos de privatización del Estado y de la vida cotidiana en general, si bien tienen su ímpetu pionero en la dictadura de Pinochet, no llegan a ser revertidos en los gobiernos de la postdictadura liderados por la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza opositora que encabeza la democratización chilena. Ello no ocurre pese a la significativa expansión del gasto social estatal, especialmente en educación y salud como áreas sensibles, que impulsa entre los años 1990 y 2009¹. La razón estriba en que, lejos de una reconstrucción de los antiguos servicios públicos, tal gasto se orienta a estimular el crecimiento de lo que el propio Ruiz Encina (2015) ha denominado un “capitalismo de servicio público”, esto es, un singular modelo de acumulación por el cual grandes

¹ En los gobiernos de la Concertación, el aumento promedio anual del gasto público social total fue de 5,1%. En particular, en educación fue de 7,3%, mientras en salud alcanzó el 7,8%. Véase CIEPLAN (2013).

empresas privadas (nacionales al inicio, luego con integración creciente de capitales extranjeros) proveen los servicios públicos a costa de subsidios estatales, es decir, el pregonado *voucher* de los monetaristas de Chicago². Se fija así un curso en el que florece, hasta su impresionante talla actual, una profusa red de universidades y centros privados de enseñanza, de clínicas y centros asistenciales privados, pero también de obras de infraestructura vial y hospitalaria, proyectos de vivienda social, centros de asistencia a niños sin familias y hasta cárceles, que se valen para aquello de una estrecha dependencia de las asignaciones estatales, bonos y licitaciones de diverso tipo³.

¿Qué condiciones políticas e ideológicas operan en esta conformación? En general, unas que no se agotan en las conocidas acusaciones a la ineficiencia estatal, tan pregonadas en los círculos políticos e intelectuales de la América Latina de los años ochenta y noventa, en medio de los estragos que provocan las escaladas inflacionarias. En Chile, más bien, sobre todo entre esta última década del siglo XX y comienzos del siglo XXI, bajo condiciones de estabilidad democrática y auspiciosas circunstancias macroeconómicas, el orden neoliberal se asienta hasta el punto de desplegar un original camino de profundización, difícil de rastrear en cualquier otra experiencia histórica, dentro y fuera de América Latina, no sólo por sus grados de avance mercantil sino también por las innovaciones bajo las cuales éste se presenta.

Es que ambos rasgos están asociados al carácter socialmente excluyente del proceso de democratización chileno, así como también, y como consecuencia de lo anterior, a la capacidad de determinación que, sobre las políticas económicas, la dirección cultural y los espacios de base de la sociedad, alcanzan actores específicos como la Iglesia Católica, los militares, las tecnocracias económicas y políticas y, especialmente, el gran empresariado (Cortés Terzi, 2000) fortalecido en dictadura y relanzado luego en democracia a la conquista de los mercados latinoamericanos. Asimismo, es clave para este proceso el cómo, dentro y fuera de la propia Concertación, son derrotados los grupos político-intelectuales que intentan redefinir los fines del proyecto histórico de esta alianza gobernante, adoptando este proceso de cambios una conducción ideológica incontrarrestada.

² En Chile, la conducción del proceso de reformas es liderada por los “Chicago Boys” a diferencia de otras experiencias en las que estos cuadros político-intelectuales son derrotados. Par ahondar, en una comparación entre los casos argentino y chileno, véase Autor (2018).

³ En educación, especialmente a nivel universitario, imperan grandes consorcios, nacionales e internacionales, que encabezan el predominio de un sistema masivo-lucrativo que capta porcentajes cada vez mayores de estudiantes (alrededor del 70% de la matrícula total), en desmedro de las universidades estatales (Sanhueza y Carvallo, 2018); en salud, emergen *holdings* que llegan a controlar, simultáneamente, tanto el aseguramiento como la provisión privada de salud, e incluso, en algunos casos, el mercado de venta de medicamentos (Goyenechea, 2014).

La colonización empresarial de las élites concertacionistas

La dictadura cívico-militar chilena se eleva como un ejemplo excepcional en América Latina, pues alcanza los mayores grados de refundación social y política del último período autoritario. Los militares chilenos, en connivencia con los sectores civiles que apoyan el golpe de Estado de 1973 y otros que se suman más tarde, impulsan un autoritarismo que sepulta la “vía chilena al socialismo”, la economía desarrollista y la política nacional-popular impulsada desde los años cuarenta. Como en ningún otro país de la región, en Chile el neoliberalismo desembarca en dictadura (Ruiz, 2019).

Bajo tal égida dictatorial, los cambios económicos y sociales que se impulsan, desarticulan a los principales actores de la etapa histórica anterior, condicionando el panorama social. Las clases y grupos sociales que portaran los proyectos históricos del Chile desarrollista, especialmente la clase obrera y los sectores medios ligados a la esfera de la industrialización sustitutiva, son sacados de escena. El inicio de esta transformación se ubica en la desindustrialización que acarrea la irrupción neoliberal, la cual define tempranamente la “pérdida del peso estratégico de la clase obrera” (Martínez y Tironi, 1985) y desata en su lugar un crecimiento ininterrumpido de los trabajadores de los servicios, cuya tercerización no siempre responde a simples ocupaciones precarias de refugio. Respecto a los sectores medios, el llamado “emprendimiento forzado”, como una falsa empresarialización inicial, prosigue al desmantelamiento del “Estado empresario” y, en especial, a sus antiguos servicios sociales, lo que obliga a la migración de las viejas burocracias estatales hacia el mundo privado (Ruiz y Boccardo, 2014).

La desarticulación política, por su parte, sustentada en la política de represión ejercida por el Estado sobre los liderazgos políticos y sociales de la izquierda, produce un cisma en sus partidos, otorgando una autoridad inédita y sin contrapesos a ciertas élites y franjas reducidas de políticos e intelectuales que asumen la tarea de construir la oposición al régimen y de negociar los términos de la transición pactada con los militares. Tales términos son justificados a través de la elaboración de una teoría política de la transición, que viabiliza la vía de la negociación con el régimen a partir del reconocimiento del marco constitucional establecido, completando un relato sobre el cambio social y político que predomina en los años siguientes.

Es esta doble desarticulación social y política de los actores subalternos —incluidas las tradicionales capas medias y sectores obreros, y otras actorías que cumplieron papeles clave en la defensa de la democracia en dictadura, como el movimiento de mujeres—, fraguada en dictadura y prolongada en democracia, la que singulariza la transición chilena

como una en la que no existe una movilización anclada en sectores políticos movilizados. Y es que, desestructuradas las bases de sustentación social del ciclo anterior, se abre en el horizonte, ya en la misma negociación con que se supera la experiencia autoritaria, una utopía elitista de política sin sociedad que marcará el derrotero de las décadas siguientes (Ruiz, 2015).

En los años noventa, la mantención de la exclusión popular, siguiendo el camino del autoritarismo previo, se justifica en la preservación del crecimiento económico y la estabilidad de la transición (Böeninger, 1997). Esa es la justificación con que se dilata la democratización social, escindida del proceso de democratización política que se lleva adelante. Un ideologismo que hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de tal situación, sustrayéndose muchas funciones estatales de la política abierta, al ser presentadas como “técnicas” y “apolíticas” (Moulian, 1997).

El gobierno de Patricio Aylwin traza la línea de acción de los gobiernos de la Concertación: continuidad en los fundamentos de la institucionalidad, el modelo económico y las políticas sociales heredadas, excepto concesiones corporativas a grupos con capacidad de presión, como el gran empresariado (Ruiz, 2019). Una conducción política y económica pragmática, de corte tecnocrático, instala tal continuación, en base a consensos que anteceden a la nueva etapa de gobiernos civiles, pese a justificarse en los vetos de la derecha defensora del régimen autoritario y en la amenaza militar que se cierne sobre la democracia recuperada.

A estas decisiones políticas se acopla una conducción de la política económica que asume una línea de consenso y no confrontación con el empresariado, incluso antes de realizarse el plebiscito de 1988 que decidió la suerte de Pinochet (Gárate, 2013). Como consecuencia, las críticas al modelo económico autoritario que propugnara la mayoría del equipo económico de Aylwin en la década previa (Puryear, 2016), van a ser reemplazadas por una crítica de menor calibre a la gestión de los “Chicago Boys” chilenos por no establecer políticas sociales que permitieran aminorar los efectos de la liberalización y apertura indiscriminadas de la economía (Gárate, 2013).

Atentos a no parecer “irresponsables” a ojos de los organismos internacionales de crédito (como el FMI y el Banco Mundial) y a no poner en peligro los mejorados índices macroeconómicos, quienes se hacen cargo del manejo económico en los primeros gobiernos civiles desechan un cambio en el modelo económico. En realidad, aceptan su continuidad sobre todo en tanto su trabajo no había dado lugar a la elaboración ni de un modelo de desarrollo alternativo ni de una versión actualizada del estructuralismo de la

CEPAL que había caído en desgracia frente al “dragón inflacionario” (Gárate, 2013). Pero, además, a esta convicción sobre el modelo económico heredado se suma la necesidad de un actuar que ayude a legitimar a aquél frente a la población en general, así como al propio grupo de economistas que asume el gabinete económico de Aylwin, en tanto calificados administradores.

En efecto, en 1989 las encuestas de opinión muestran un rechazo masivo de la población al experimento de Chicago y al régimen militar (Fontaine, 1992), mientras, en el seno de su principal defensor, el empresariado, existe desconfianza frente al próximo gobierno y, especialmente, el próximo equipo económico (Otano, 2005). En el caso de este último, la legitimación frente al empresariado se produce a poco andar, a partir del rumbo que adopta la reforma tributaria de 1990 (que tranza sus efectos redistributivos y aumenta el IVA, en favor de recursos para programas sociales) y la ortodoxia con que se actúa ante la inflación que provoca la Guerra del Golfo y la elevación del precio del petróleo (Otano, 2005).

Por otro lado, se instala en el gabinete económico el convencimiento de implementar políticas sociales destinadas a legitimar la economía de libre mercado entre la mayoría de la población. El “crecimiento con equidad” promovido al inicio de los años noventa avanza en ello, al poner de manifiesto tanto la valoración existente de los fundamentos del modelo económico heredado, como la “deuda social” (las violaciones a los Derechos Humanos y la compensación del 44% de pobres en Chile sobre el que habla la CEPAL en 1987) que se termina asumiendo como principal tarea de la democracia (Otano, 2005).

En esta decisión política, como señalan Huneeus et al. (2014), opera la estrategia de consolidación de la democracia definida en torno al desempeño económico, formulada a partir de las causas del golpe de Estado y de las vicisitudes de los primeros gobiernos democráticos de América Latina (como el de Alfonsín en Argentina). Se asume que la estabilidad de corto plazo depende de la subordinación de los militares a la autoridad civil y de la actitud de Pinochet, mientras en el mediano y largo plazo depende de la buena gestión económica, entendida básicamente como crecimiento y superación de la pobreza. Como consecuencia, la impermeabilidad de la política económica frente a la sociedad se expresa como doctrina entre todos los gobiernos concertacionistas de allí en adelante. De este modo, la línea de definiciones económicas que estos siguen, a partir de su inclinación a mantener y proyectar el modelo económico heredado, acerca a sus élites políticas e intelectuales a los principales agentes y dirigencias del empresariado.

En particular, en ello son clave los efectos de la “Crisis Asiática” de fines de los años noventa, pues ella acelera este proceso. En concreto, en la disposición por ajustar el rumbo económico vacilante, los liderazgos gremiales más jóvenes del gran empresariado criollo —vinculados a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), uno de los principales y más antiguos gremios empresariales del país— pugnan internamente por un giro que sepulte la ortodoxia neoliberal defendida hasta allí por las corporaciones empresariales, en favor de una mayor flexibilidad política e ideológica que permita la defensa de sus intereses ahora en alianza directa con la Concertación, saltándose la hasta allí aún necesaria intervención de los partidos de la derecha política (Campero, 2003). Ello, para aprovechar la apertura sin par que, a partir del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos en el año 2003, inclina al país hacia la primacía de una línea de integración a los centros económicos mundiales, bajo la alianza del sector financiero local con sus pares externos, sin resistencia de otros grupos ante la competencia externa y sus posibilidades de mercado (Fazio y Parada, 2010). Una línea de consolidación externa que refleja la que internamente habían favorecido todos los gobiernos de la Concertación desde Aylwin, al consolidar un proceso de privatizaciones que, en democracia, alcanza a puertos, sanitarias, obras públicas y servicios como el suministro eléctrico y de agua potable, entre otras áreas de relevancia.

Dentro del país este acercamiento entre las élites concertacionistas y el gran empresariado es apuntalado, además, por un accionar político que exacerba los niveles de determinación de este último sobre la definición del rumbo económico, y sobre el modo de procesar la conflictividad aparejada al orden social construido bajo hegemonía neoliberal. Ello se inaugura en el gobierno socialista de Ricardo Lagos —tercer presidente de la Concertación— y se desarrolla al alero del refuerzo del vínculo entre empresariado y tecnocracia, que en esta etapa alcanza abiertamente a las políticas sociales impulsadas por el Poder Ejecutivo, proyectando un salto respecto al carácter reactivo que había predominado en el comportamiento político empresarial de los años noventa (Campero, 2003).

En efecto, se inaugura una dinámica de elaboración y fiscalización de los proyectos de reforma, sustentada en el intercambio entre equipos técnicos del Gobierno, de los partidos políticos que componen a la Concertación, pero también de aquellos ligados a la oposición de derecha, y en el cual intervienen también centros de investigación afines a la ortodoxia neoliberal, generalmente ligados de manera directa al gran empresariado. Bajo dicha dinámica, los equipos técnicos elaboran los proyectos, los jerarquizan y definen su temporalidad (Morales, 2014), profundizando el divorcio entre política y sociedad al legitimar la concreción de soluciones elitarias a problemas políticos generales

(Ruiz, 2015). En tal escenario, los equipos económicos —especialmente los ministros de Hacienda— actúan como mediadores entre el interés empresarial y gubernamental, mientras los equipos técnicos de los *think tanks* afines al empresariado⁴ lo hacen como productores de unos contenidos validados por su carácter técnico y supuestamente “neutro” (en base a un manejo macroeconómico “responsable” que aumenta el peso de los grupos económicos⁵), pese a sus consecuencias sociales (Caviedes Hamuy, 2015).

En paralelo a esta dinámica elitaria de definición política-intelectual que se impone, con un economicismo que sobrepasa a la perspectiva política, en el propio gobierno de Lagos se inicia el avance de una colonización empresarial de la política, en tanto subordinación de esta última al poder económico, horadando así la soberanía política y la capacidad de los propios partidos políticos para representar intereses sociales ajenos a los empresariales (Ruiz, 2019). Se trata de un fenómeno transversal al espectro político, que se vehiculiza tanto a través del financiamiento a campañas políticas como a partir de una extendida circulación público-privada entre los directorios de empresas relacionadas con los servicios sociales privatizados y el aparato estatal, pero que es mucho más significativo en la Concertación al afectar el sentido histórico de varios de los partidos que la componen —y especialmente el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano— y convertir a esta coalición en una mediadora cada vez más relevante del interés empresarial en la disputa por la orientación estatal, afectando incluso el peso antes indiscutido de la derecha política en ese aspecto (Ruiz, 2015).

Abierta con fuerza a partir de la Agenda de Modernización del Estado⁶ acordada en el año 2003 por las dirigencias de la oposición y el oficialismo, la “puerta giratoria” de la circulación público-privada iniciada en la administración Lagos y profundizada en los gobiernos siguientes de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, acredita un tránsito que es sobre todo sectorial: concentrado en los gabinetes presidenciales y las superintendencias, predomina en él la emigración hacia cargos privados en el mismo sector donde antes se

⁴ Los más influyentes son el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Libertad y Desarrollo. El primero es fundado en 1980 por un grupo de ex funcionarios de la dictadura y otras personalidades de la derecha, como respuesta a las críticas desplegadas por instituciones como CIEPLAN y FLACSO a las políticas del gobierno de Pinochet y a la ortodoxia de su gabinete económico (Jara, 2017). El segundo nace en 1990 para defender y promover las políticas públicas basadas en los principios de la “sociedad libre”, ante el temor de que la democratización deviniera cuestionamiento a las reformas neoliberales (Larroulet, 2008).

⁵ Así, si el ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre, mantiene contacto permanente y reservado con los investigadores del CEP —y abre nexos similares con otros centros opositores— para “testear” los proyectos de ley, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, apela a la legitimidad “técnica” de estos espacios para limitar a un dígito el alza del gasto fiscal, profundizando la dinámica subsidiaria del Estado (Arias y Ramírez, 2006).

⁶ A inicios de los 2000, el clima político se agrava por irregularidades estatales, los casos de coimas y sobresueldos de altos funcionarios y delitos en el sector privado. El mercado de capitales se paraliza una semana y se desploma la confianza en la fiscalización. La presión de la derecha lleva a una salida pactada como “modernización del Estado” de tipo “anticorrupción”, que desplaza las reformas políticas y ata la dirección económica a los intereses empresariales, al reducirse a términos de eficiencia y transparencia (Garretón, 2012).

desempeñó en el ámbito público (Maillet et al., 2016). Del mismo modo que con el financiamiento empresarial a las campañas políticas, la importancia de este fenómeno es contribuir a edificar la base social y los lazos políticos sobre los cuales se asienta un nuevo anclaje tecnocrático-empresarial, que consolida el poder de determinación política y cultural del gran empresariado en la sociedad chilena. Uno que se apoya no sólo en la cooptación de individuos de la élite concertacionista —convertidos en directores o asesores de grandes empresas—, sino también en una colonización abierta de los grandes empresarios sobre la política, quienes posicionan a ministros y figuras clave en el seno del Gobierno y del Estado, provenientes directamente desde sus filas.

Desde la segunda mitad de los años 2000, tal consolidación del poder empresarial repercute sobre todo en la política social, al instalarse —nuevamente con el gobierno de Lagos, pero luego consolidado en el primer mandato de Bachelet— incentivos a un tipo de capitalismo basado en subsidios estatales a la acumulación privada, especialmente en lo que respecta a los servicios sociales ya privatizados (Ruiz, 2015).

Entonces, la aceptación temprana del modelo económico heredado y sobre todo las definiciones políticas y económicas de la Concertación en favor de la alianza entre el capital financiero local y extranjero, impulsan que la meta inicial de esta coalición respecto a establecer un frente con el empresariado para dinamizar la economía (Arriagada, 2004) se exceda con largueza, arribando importantes sectores de su élite política e intelectual a un vínculo prácticamente orgánico con las fracciones más importantes del gran empresariado.

Se trata de un anclaje social que consolida el giro hacia un neoliberalismo nada de ortodoxo, pero sí extremo y “avanzado” en las formas que crea para apuntalar la acumulación capitalista de la élite económica. Un legado social y económico propio de las élites político-intelectuales de la Concertación, que les permite a éstas pasar del problema político inicial de defender un modelo económico resistido por sus consecuencias sociales y origen autoritario —esto es, superar la tarea de la legitimación—, a una formulación propia, no obstante, asentada, más allá de sus diferencias doctrinales con los “Chicago Boys” de la etapa autoritaria y con la ideología neoliberal en sentido estricto, en los mismos fundamentos de privatización y mercantilización de recursos vitales, financierización de la economía y redistribución estatal plutocrática, heredados del período anterior.

El abrupto silenciamiento de la disputa sobre los fines de la Concertación

La transformación en la estructura de clases, las exclusiones políticas y las tensiones socioculturales irresueltas que acompañan a la postdictadura chilena originan, desde inicios de los años noventa, un amplio debate entre los intelectuales locales como contraparte al exitismo que recorre a una década marcada por el fenomenal crecimiento económico que encadenan los gobiernos concertacionistas.

El caso de un país que ha salido de la dictadura y que ha entrado en un proceso de modernización económica acelerado es, entonces, el marco para pensar. En un debate con giros a lo largo de la década y que involucra a intelectuales que plantean sus interpretaciones desde dentro y fuera de la Concertación, es posible reconocer la existencia de dos grandes bandos. Por un lado, el de los defensores del proceso de modernización y democratización que vive el país y de las particularidades de la transición chilena; y, por otro, el de quienes critican tal democratización por no haber logrado modificar la realidad histórica, cultural y políticamente degradada (Pinedo, 2000).

Dicha discusión tiene su punto de partida en el hecho y las controvertidas ideas fuerza que articulan la presentación del Pabellón Chileno en la Expo-Sevilla de 1992, cuando la delegación chilena exhibe un gigantesco témpano de hielo con el que se busca refundar la imagen de Chile en el exterior bajo el concepto publicitario de un “país diferente, ganador y moderno”. Lo “diferente” apunta a establecer una diferencia con el resto de los países latinoamericanos, varios de los cuales enfrentan en esos años sendas crisis políticas y económicas de las cuales Chile parece haber zafado producto del “milagro económico” de fines de los años ochenta. La imagen de un “país ganador”, por su parte, se alza como fórmula para atraer a la inversión extranjera, en momentos en que se impulsa una profunda apertura económica centrada en la exportación de materias primas. Por último, la idea de un “país moderno” apela a la capacidad competitiva de Chile en el mercado internacional, con el objeto de relanzar las exportaciones en un escenario económico altamente interconectado.

La metáfora del iceberg, por tanto, es extraordinariamente clara. Como enfatiza el comisario chileno ante la Expo-Sevilla, Fernando Léniz, el hielo simboliza la “frialidad y seriedad locales”, alejadas del “tropicalismo” del resto de América Latina. Chile, como un país ajeno al ajeteo regional, puede alardear de un manejo económico que lo aísla del mal inflacionario y del estancamiento económico (La Segunda, 1991). El “Adiós, América Latina”, ya promovido en los estertores de la dictadura (Lavín, 1988), se relanza ahora en

democracia. La eficiencia empresarial local se destaca y se busca asimilar con remotos lugares como el Asia Pacífico. El iceberg, así, constituye una declaración de principios y una visión de futuro de una parte de la población, que homologa la modernidad con una modernización reducida solamente a su faz económica (Garretón, 1994).

Comenzando la década, las críticas a esta interpretación mercantil de la identidad y la modernización chilena estuvieron centradas, fundamentalmente, en cómo ella ignoraba la dimensión cultural que también supone una modernización. En efecto, mientras para algunos quedaba en evidencia la falta de “espesor cultural” del país, haciéndose invisibles las aspiraciones que podrían asociarse a la modernidad, pues se asumía a la modernización como un fin en sí mismo y no como un medio para mejorar el bienestar general (Subercaseaux, 1991), para otros tal operación pretendía refundar la identidad nacional en la diferencia del resto de las naciones latinoamericanas y del propio pasado del país, omitiendo el carácter heterogéneo y periférico de su constitución (Pizarro, 1991).

Del lado de los defensores del proyecto, y anticipando el tenor de lo que vendría, se defendió la necesidad de abandonar el “pensamiento periférico” de otras épocas. Así, para el artista visual Guillermo Tejeda (1991), ellas se situaban en el pasado que se pretendía superar en democracia, como resabios de la polarización previa al golpe militar, cuando se habría caído en la politización del arte y en una cultura de la ética y el compromiso que lo habrían desnaturalizado. Algo similar a lo planteado por Hernán Garfias (1991), para quien las bases para afirmar que Chile era un país “diferente, ganador y moderno” existían, pues se contaba con un sistema económico que funcionaba y cuyos índices superaban a varias otras naciones, a la vez que se era políticamente exitoso.

Tras este primer intercambio, desde la segunda mitad de los noventa se abre un debate más amplio que, excediendo la tensión entre modernidad e identidad que estructura el diálogo en torno al hito del iceberg, apunta al carácter y sentido de la modernización heredada de la dictadura y sus implicancias para el vínculo entre sociedad y modernidad en Chile. Una discusión de apariencia académica que, sin embargo, sirve como marco para hacer los primeros balances sobre la postdictadura chilena, caracterizando y evaluando el derrotero del proyecto histórico de la Concertación, pero también para analizar los efectos generados por la refundación capitalista iniciada en dictadura y proyectada en democracia.

De este modo, mientras las posiciones más críticas al rumbo adoptado por el proceso de democratización concentran sus reparos en la actitud de la democracia frente a los “poderes fácticos”, el abandono de las utopías de la élite en el poder y en la excesiva

economización de la sociedad en desmedro de la política, los que lo defienden destacan los niveles de crecimiento económico alcanzados, el descenso de la pobreza, la estabilidad y las reformas políticas llevadas adelante (Pinedo, 2000).

En el caso del bando crítico, cabe considerar la visión de Manuel Antonio Garretón, intelectual ligado estrechamente al nacimiento y proyección de la Concertación. Para él, en Chile operaba una “modernidad inconclusa”, en tanto, resueltos sus problemas económicos, eran materia pendiente las dimensiones institucionales, culturales y políticas de un desarrollo que permitiera transitar hacia una modernidad propia. La asumida, en tanto copia de otros contextos culturales, provocaba una exclusión mayoritaria y la naturalización del devenir histórico, al confundirse la modernidad con la modernización capitalista existente (Garretón, 1994). Por su parte, ensayando una postura más desencantada, desde fuera de la coalición, el sociólogo Tomás Moulian considera a la sociedad chilena de fines de los años noventa un producto del experimento de modernización capitalista impulsado por la dictadura, mantenido y profundizado en democracia a partir del travestismo político y gatopardismo de quienes defendieran las transformaciones sociales de los años sesenta. Las bases de tal cambio las encuentra en la “política del consenso” y en el “blanqueo” de la herencia dictatorial, así como en la naturalización de una matriz productivo-consumista potenciada en contexto civil (Moulian, 1997; 1998).

Entre quienes defienden el derrotero de la democratización chilena destaca la posición de José Joaquín Brunner —ministro de Educación en el gobierno de Eduardo Frei—, para quien, al vivir Chile una mutación acelerada, se hace necesario aceptar la modernidad como algo dado, sobre todo en un contexto de triunfo de la democracia liberal y del mercado. En particular, para este intelectual el modelo cultural moderno se impone menos por la fuerza de las ideas que por los procesos de racionalización, diferenciación, profesionalización y reproducción cultural que impulsa, perfilándose en Chile una modernización sin proyecto de modernidad propio del cual se tenga control (Brunner, 1994). Un proyecto moderno al cual se ha incorporado el país, contra aquellas visiones que lo negaban en nombre de una determinada identidad local o regional (Brunner, 1998a).

A él se suma la interpretación del sociólogo Eugenio Tironi (1999), otro reconocido defensor del modo en que se despliega la democratización chilena, quien señala a la transformación social y cultural ocurrida como el resultado del “ímpetu modernizador” de corte neoliberal que propicia la dictadura, profundizado luego con la extensión de la economía de mercado en democracia y acelerado en los años noventa por el crecimiento económico. Destaca, por ello, la supuesta tendencia de las masas a ocupar el territorio y el

espacio público, pese al “malestar de las élites”; así como el hecho de que las personas comporten, en general, como consumidores más que como ciudadanos, como individuos más que como comunidades, y como defensores de intereses privados más que como promotores de fines colectivos. La verdadera transición vivida, a su juicio, había sido la difícil transición hacia la “normalidad”. La búsqueda de la modernización, sin aviso, había traído consigo nuevos problemas que requerían soluciones originales.

En lo sustantivo, de estas posiciones, representativas de un espectro más amplio, se derivan dos tensiones de relevancia tanto para la conducción ideológica de la Concertación desde la segunda mitad de los años noventa, como para entender el papel jugado por las élites político-intelectuales en sus gobiernos durante este período: la idea de modernidad que predomina y el tipo de desafíos que, a partir de tal elección, es asignable a Chile como producto de la modernización capitalista iniciada en dictadura (Ariztía y Bernasconi, 2013). Y es que, pese a sus diferencias, las voces críticas consignadas consideran a la modernidad como un proyecto de autonomía, a saber, la conciben como un proyecto político histórico por el cual los actores deben constituirse y movilizarse, preferentemente mediante la participación política. Por el contrario, las voces defensoras se inscriben en una noción de modernidad en tanto experiencia consustancial a los procesos de modernización: como una experiencia vital que emana de los cambios propios del proceso de modernización y no como un *telos* (Ariztía y Bernasconi, 2013). En este último caso, la modernidad es concebida como un proceso avasallador en el que predominan las formas por sobre el contenido y los medios antes que los fines, en tanto lo que avanza es una racionalidad formal basada en la imitación e importación de mercancías y mensajes culturales que llevan la experiencia de la modernidad al conjunto social (Brunner, 1987). Las ideas, así, no generan objetos; más bien, los objetos son los que producen imágenes de la modernización: “la modernidad ha dejado de ser una opción: es un hecho de la época, viene de la mano con la globalización de los mercados y la expansión de la democracia, con la expansión de la educación e industria culturales, la ampliación de la experiencia del consumo y la mutación de valores” (Brunner, 1994: 17).

Por esta inevitabilidad, el desafío que comporta el proceso de modernización chileno es el control y gestión de sus efectos, mas no el cuestionamiento ni de la forma ni del sentido de la modernidad que conlleva. En contraposición, quienes ven a la modernidad como un proyecto, ven la posibilidad de optar entre modernidades racionalmente imaginadas y políticamente realizables.

Estas implicancias políticas, como puntos de llegada del debate sobre la modernidad y la modernización, son definidas mientras paralelamente se erige un cuestionamiento al

proyecto concertacionista, cuyo rasgo inédito es provenir desde sus propias filas. En efecto, se atiza el debate entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”, denominados así por promover, los primeros, una visión crítica de lo obrado por la Concertación, especialmente por las asimetrías que mantenía el país en lo político, económico y cultural a fines de los noventa, por la democracia incompleta exhibida y por la costumbre instalada al interior de la coalición de evitar los disensos; los segundos, por valorar lo alcanzado por la Concertación en términos de reducir la pobreza, progreso que habría traído consigo problemas propios de una sociedad en fuerte proceso de desarrollo y cuyo cambio de rumbo podría abrir la puerta a experimentos populistas⁷.

En general, se puede señalar que varios de los argumentos esgrimidos en este debate provienen del Informe de Desarrollo Humano (IDH) para Chile presentado por el PNUD en 1998, cuyo impacto puso en el tapete la existencia de un malestar social hasta allí ignorado, ligado, pese a los avances modernizadores, a una inseguridad social creciente en torno a los sistemas de seguridad colectiva (salud, previsión, trabajo y educación). “Las paradojas de la modernización”, como se tituló el informe, vino a potenciar el punto de vista de los críticos de la postdictadura chilena, en medio de un desfavorable escenario económico y político, marcado por los fracasos electorales de la Concertación en las elecciones municipales de 1996, parlamentarias de 1997 y el apretado triunfo de Lagos en la presidencial de 1999, contra todo pronóstico.

Ahora bien, llegado el nuevo siglo, las complicaciones con que asciende el gobierno de Ricardo Lagos, acosado por la desaceleración económica y el juicio de los empresarios contra el primer gobierno socialista desde Salvador Allende, deviene en un silenciamiento del debate en nombre de la gobernabilidad (Ominami, 2009). En ausencia de aquél, se evita asumir directamente problemas no superados del pasado (como la reconciliación, el tratamiento de los enclaves autoritarios y los “poderes fácticos”, el tema de la justicia o el término de la impunidad) y proyectar temas de futuro (modelo de crecimiento y de desarrollo, la integración nacional, la superación de exclusiones y desigualdades) (Garretón, 2001). Se impone, así, la conducción ideológica de quienes apuestan sólo por gestionar las complejidades de la modernización: la naturalización de la modernización autoritaria se impone porque su correlato político es negar la redefinición de los fines del proyecto histórico de la Concertación.

De allí la defensa de una intervención parcial y “experta” en detrimento de una propiamente intelectual, pues se apela a una intervención orientada más a develar y

⁷ Véanse, como manifiestos de cada grupo, los textos “La gente tiene la razón” y “Renovar la Concertación: la fuerza de nuestras ideas” en Ominami (2009).

analizar lo existente que a definir y promover coordenadas de futuro (Ariztía y Bernasconi, 2013). Se encuentra, así, el argumento ideológico para que se agudice la tecnocratización de las filas concertacionistas, como anticipo de su mayor implicación con el interés empresarial a comienzos de los años dos mil. Y es que la negación del debate sobre un proyecto post-transicional fortalece las posiciones neoliberales y conservadoras en el seno de la coalición, así como las tendencias pragmáticas empeñadas en evitar conflictos para mantener su situación de poder (Garretón, 2001). A la vista están los intelectuales analizados: lo suyo son visiones desde el poder, unas sobre la administración de éste, que es el modo en que se concibe la política en los años noventa. Por ello no hay paradoja en su triunfo: pese a ser minoritaria, su posición es cualitativamente más relevante en ese escenario político⁸.

Siguiendo las premisas de la gestión y no del cambio, es en el gobierno de Lagos que tal tecnocratización se extiende, pues es entonces cuando se inicia el deterioro definitivo de los partidos políticos, a los cuales se les niega su papel central en la toma de decisiones políticas (Ruiz, 2019). Lo más significativo, sin embargo, es que con este ascenso tecnocrático es operativizada la conducción ideológica que se impone, pues se rodea de bases sociales e intelectuales que le dan eficacia.

¿Mercantilización y democratización?: la originalidad del neoliberalismo chileno en democracia

Estas tecnocracias operacionalizan los marcos teóricos dispuestos por la intelectualidad conservadora y neoliberal de la Concertación, en la forma de políticas públicas estructurales o sectoriales que traspasan el nivel abstracto del discurso político. En ese sentido, al iniciarse el nuevo siglo, esta conducción ideológica deviene en un nuevo papel para los intelectuales del régimen: si en la primera década de la coalición los esfuerzos de su intelectualidad estuvieron puestos en legitimar social y políticamente lo asumido como propio de la herencia dictatorial, ahora se pasa a una producción propia e imaginativa, que no se queda en profundizar los pilares de la modernización autoritaria, sino que, por la entronización que alcanza el interés empresarial en el seno de las élites del conglomerado, deviene en la constitución de formas inéditas de capitalismo neoliberal.

El ya mencionado “capitalismo de servicio público” que encuentra su fundamento en la homologación entre modernización y mercantilización, y su legitimidad social y política

⁸ Así pues, figuras como Brunner, Tironi o Edgardo Böeninger van a desempeñarse como ministros de Estado, y van a ejercer como consejeros de alto rango en los gobiernos de la Concertación.

en aquella que relaciona mercantilización y democratización⁹, entendiendo esta última básicamente como acceso al consumo y libertad mercantil. Tales ideologismos —nunca reconocidos como tales— permiten a los intelectuales del régimen, sobre todo desde el “*impasse* del malestar”¹⁰, mostrar a los críticos de las políticas neoliberales como opuestos a la modernización y como “neoconservadores” (Brunner, 1998b; Tironi, 1999), justificando la exclusión política y la desigualdad que provocan las definiciones de la Concertación como desajustes o asincronías propias de los procesos modernizadores¹¹. Ellos permiten, además, hacer abstracción de la propia naturaleza de la mercantilización (determinada por intereses sociales y adscrita a relaciones de poder), que es opuesta a la democratización (sea por un sesgo económico de acceso o por uno político relacionado con la imposición de lo legítimo) y, a la vez, dudosamente asimilable a una modernización que siga el camino trazado por la dictadura, de reducirse, fundamentalmente, a una redistribución especulativa en favor del empresariado.

La ideología neoliberal recorre estas falsas confusiones, por una parte, valiéndose de la centralidad del *hombre económico* y de la elección del consumidor como factores supuestamente inherentes a la condición humana; y, por otra, asumiendo a la elección del consumidor y no al trabajo como fuente de la riqueza. El consumo privado es la clave, dando una centralidad cada vez mayor al mercado en la sociedad y, con ello, produciendo nuevas formas de diferenciación social que agudizan las disparidades sociales en un caso como el chileno en el que se renuncia a regularlas (Ruiz, 2019).

Quizás los dos esfuerzos más relevantes por materializar tales nociones ideológicas como instrumentos de política están en el ámbito educativo y en la salud, siendo fundamental para ello la fórmula del financiamiento a la demanda o *voucher*, ya mencionada. En el caso del primero, se materializa como un extendido proceso de reformas, cuya orientación subsidiaria, que fortalece al mercado contra lo público y a la competencia contra el interés pedagógico, es encubierta bajo el ropaje de un relato de modernización técnico-pedagógica que busca separar aguas con dos conservadurismos distintos: los de la

⁹ Así, por ejemplo, a fines de los noventa, Brunner destaca que con el avance de la universalización del lenguaje de mercado y la civilización material capitalista se diluye la escisión entre cultura popular y alta cultura, a la vez que se mezclan las culturas centrales y periféricas. En ese sentido, la globalización cultural —empujada por el avance del capital a través de las industrias culturales, el comercio y el turismo— tendría un efecto democratizador y pluralizante, puesto que universaliza el acceso a la cultura mundial a nivel de todos los grupos sociales y contribuye a que ella exprese la hibridez aportada por diversas culturas locales. Véase Brunner (1998a).

¹⁰ La reacción contra la tesis del “malestar”, relacionada con los resultados del informe del PNUD, no se hizo esperar a fines de los años noventa. Entre otros, el propio Brunner (1998b) señalaba que las condiciones de nacimiento de esta polémica evidenciaban que aquella no era sino una “invención de los intelectuales”.

¹¹ Con el IDH de 1998 entra en crisis el sustrato fundamental del relato concertacionista de gobierno en los años noventa: el miedo al desorden. El propio informe, sin embargo, demuestra que el miedo existente en esos años ya no era hacia los militares, sino a la incertidumbre que depara el futuro. Por ello, esta defensa del legado de la Concertación que apela a las contradicciones de la modernidad no es sino un recurso retórico para ganar el “centro político” y defender tal legado en medio de su cuestionamiento.

izquierda, asociados a la nostalgia del siglo XX y su “Estado docente”; y los de la derecha, vinculados a la tradición pre-secular (Orellana y Miranda, 2018).

El grado más alto de elaboración de este argumento referido a la discusión educacional se encuentra en la obra del propio Brunner, principal intelectual de la Concertación en esa área. Éste fustiga contra los conservadores que defienden la vieja educación pública, aquella gobernada por corporaciones y oligarquías académicas refractarias a la racionalización de sus procedimientos. Pero, a la vez, también lo hace contra los conservadores que defienden el mercado autorregulado como verdad revelada, convocándolos a aceptar que el mercado es esencialmente irracional. Desde su perspectiva, es el Estado quien debe “guiar al mercado” a través de instrumentos bien calibrados, llevando a la educación a la modernización, la que no puede llegar ni de la mano del viejo Estado ni tampoco del mercado autorregulado (Brunner et al., 2005).

En el caso de la educación superior, esta noción, que emerge al alero del marco de gestión tecnocrática que promueve el exministro en los años noventa, sienta las bases sobre las cuales el gobierno de Lagos emprende la reforma sobre esta materia, dando origen a un inédito sistema de acreditación y de financiamiento bancario o Crédito con Aval del Estado (Brunner et al., 2005). Como señalan Orellana y Guajardo (2014), tal reforma, que permite el ingreso de la banca al negocio de las ayudas estudiantiles, no incrementa significativamente el ritmo de crecimiento de la industria educacional terciaria, sino que entrega los recursos fiscales para redirigir la apertura de vacantes a los segmentos sociales de menores ingresos. Así pues, no crea nuevas plazas con recursos fiscales, sino sólo asegura la consolidación de su tendencia precedente de crecimiento con arcas fiscales.

En la salud, por su parte, la reforma a esta área en el gobierno de Lagos buscó superar las barreras de acceso al sistema de salud, que excluía a la mayoría de la población y la segmentaba con un separación entre el servicio estatal y el privado. Dentro de ella, con el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) se buscó ajustar la estructura legal del sistema de salud buscando mayor equidad y solidaridad. Este sistema de protección contempla, desde el año 2005, un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a las administradoras privadas de servicios de salud (ISAPRES) y al Fondo Nacional de Salud, considerando una lista de patologías que se incrementa periódicamente.

Se trata, sin embargo, de un bono que no ha logrado alterar el sistema heredado, de una hegemonía privada con altas ganancias sobre una salud asumida como mercancía. El ahondamiento en el deterioro del servicio público de salud niega la posibilidad de una

libre elección de médicos y hospitales al momento de ocupar este *voucher*, tendiendo el sistema a concentrar los recursos estatales en los prestadores privados. Algo fundado en el desdibujamiento del límite entre lo público y lo privado que promueve este subsidio, que pone a competir en las mismas condiciones a las aseguradoras, clínicas y hospitales privados con los estatales (Ruiz, 2019). Estas formas de pago por prestación se profundizarán en gobiernos posteriores mediante nuevos mecanismos, incrementándose año a año la magnitud de los públicos traspasados a los prestadores privados (Goyenechea, 2014).

Así pues, la especificidad del neoliberalismo chileno se entronca a un tipo de avance mercantil sobre la vida social cuyo desarrollo, paradójicamente, tuerce la propia dinámica económica de formación de nuevos mercados. Y es que, dada su dependencia de la acción y de los recursos del Estado, aquéllos se convierten en espacios de acumulación de capital rentista, regulados estatalmente, al valer cada vez menos de la competencia y el riesgo inversor —principios básicos de cualquier mercado que se precie de tal—, y cada vez más de los subsidios y aumentos del gasto social estatal.

En nombre de la democratización, entonces, desde comienzos del nuevo siglo, se excede lo hecho por la dictadura en cuanto a privatizar antiguos servicios sociales y transformarlos en mercados de consumo y, en muchos casos, diluir el control estatal sobre ellos. Más bien, sobre tal privatización y desregulación, consagrada de todas maneras en democracia como un hecho natural, se produce, de modo original, una especie de “mercantilización rentista” que no hace sino alentar la producción política de la concentración de la riqueza y de la propiedad y, así, de la propia desigualdad.

Ahora bien, el mar de fondo ideológico de todo esto, más allá de las élites político-intelectuales, es el fortalecimiento de una nueva cultura del consumo basada en la ampliación del acceso a éste y al crédito. Una promoción que, pese a iniciarse en los años ochenta en Chile, se acelera en la década siguiente como una utópica forma de integración social, en tanto la modernización económica es asumida como un fenómeno dado. En efecto, el correlato del exitismo noventero es el que asocia consumo y modernización, debido a que la apertura económica abre el acceso a bienes y servicios antes vedados para las clases medias. Eso es lo que intelectuales como Tironi (1999) celebran como triunfo de la democratización social y puerta de entrada a la modernidad. La penetración cultural de este relato crece en medio de la desarticulación social y la exclusión política, afianzando un patrón individualista que reduce la confianza al esfuerzo propio y busca diferenciarse bajo las referencias de grupos medios en ascenso (Ruiz, 2015).

Los frutos consolidados de este cambio cultural son observables a fines de los años noventa, cuando se torna cotidiano entre los grupos sociales menos acomodados el acceso a grandes supermercados, tiendas por departamento, *homecenters* y centros comerciales. Pero, además, la década siguiente trae una redefinición de las prácticas asociadas a este fenómeno con la introducción del pago diferido o a crédito, pues, permitiendo un consumo no dependiente de los ingresos inmediatos, da pie a formas financieras de ganancia, las que apuntalan el ascenso de grandes grupos económicos en el sector *retail*. De este modo, la hasta entonces poco glamorosa industria del comercio minorista, escasamente profesionalizada y despreciada por los ejecutivos chilenos más exitosos, se convierte en una mina de oro producto del intenso proceso de expansión llevado adelante. Uno ligado no sólo a la proliferación de tiendas y centros comerciales, sino a la mayor financiarización de sus ingresos, basados en el endeudamiento de nuevas franjas sociales (Caviedes Hamuy, 2016).

En definitiva, los años noventa están marcados por un debate sobre la transición y su rumbo encubierto tras la discusión más amplia sobre la modernidad y la modernización. La coordinadas en torno a las cuales éste se articula son las alternativas posibles que puede seguir el proyecto de la Concertación o el juicio a éste, pero nada fuera de él. Las posiciones que decantan, estructuradas en torno a la posibilidad de redefinir los fines de la coalición de gobierno, dan vida a dos bandos que, sin embargo, no son asimilables ni a grupos político-intelectuales constituidos ni a adscripciones partidarias específicas, teniendo más bien una composición transversal en términos de identidades políticas.

Hacia el final de la década, el desenlace abrupto de tal discusión, que cierra la puerta a una redefinición del proyecto concertacionista en la postdictadura, propicia una conducción ideológica *de facto*, liderada por los sectores más conservadores y neoliberales de la coalición. Paradojalmente, tal conducción, aprovechando la oportunidad política que abre el propio cuestionamiento a lo obrado en los años previos, alienta la consolidación del capitalismo neoliberal chileno a partir de la implementación de inéditas formas de mercantilización de la vida social que, no obstante, benefician con escaso esfuerzo a las franjas empresariales que las disfrutan.

Una originalidad tecnocrática surgida del predominio de la gestión y la racionalidad instrumental que se imponen al cerrarse la puerta a un debate sobre los fines del proyecto concertacionista. Pero que, ante todo, es el resultado de una lucha política que, en el corazón de la democratización chilena, profundizó la crisis de la imaginación política que hasta hoy prolifera.

Referencias bibliográficas

- Arias, H., & Ramírez, P. (2006). "La trenza de poder en el CEP". *Diario La Nación*.
- Ariztía, T., & Bernasconi, O. (2013). "Sociologías públicas y la producción del cambio social en el Chile de los noventa". En Tomás Ariztía (ed.). *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente*. Santiago de Chile: Ediciones UDP, pp. 133-163.
- Arriagada, G. (2004). *Los empresarios y la política*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Böeninger, E. (1997). *Democracia en Chile. Lecciones de gobernabilidad*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- Brunner, J. J. (1987). "Entonces, ¿existe o no la modernidad en América Latina?". *Revista Punto de Vista*, (31), pp. 2-5.
- Brunner, J. J. (1994). *Bienvenidos a la modernidad*. Santiago de Chile: Planeta.
- Brunner, J. J. (1998a). *Globalización cultural y posmodernidad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Brunner, J. J. (1998b). "Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué, exactamente, estamos hablando?". *Revista Estudios Públicos*, (72), pp. 173-198.
- Brunner, J. J., Elacqua, G., Tillet, A., Bonnefoy, J., González, S., Pacheco, P., & Salazar, F. (2005). *Guiar el mercado. Informe sobre la educación superior en Chile*. Santiago de Chile.
- Autor. (2015). "El papel de la tradición: la influencia empresarial del grupo Matte". *Cuadernos de Coyuntura*, (8), pp. 40-54.
- Autor. (2016). "Endeudar para acumular: la influencia del grupo Solari". *Cuadernos de Coyuntura*, (13), pp. 35-45.
- Campero, G. (2003). "La relación entre el Gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la acción segmentada". *Revista de Ciencia Política*, (23), pp. 159-176.
- Autor. (2018). *Neoliberalismo e intelectualidad en América Latina, 1980-2003. Argentina y Chile*. Memoria de Título en Sociología, Universidad de Chile.
- CIEPLAN. (2013). *Comparación de los indicadores de gasto público social de los gobiernos de la Concertación con el gobierno de la Alianza*, Santiago de Chile.
- Cortés Terzi, A. (2000). *El circuito extrainstitucional del poder*. Santiago de Chile: ChileAmérica - CESOC.
- Fazio, H. & Parada, M. (2010). *Veinte años de política económica de la Concertación*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Fontaine, A. (1992). "Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena". En Levigne, B. (comp.). *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, pp. 93-139.
- Gárate, M. (2013). *La revolución capitalista en Chile (1973-2003)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Garfias, H. (1991). A propósito de Chile en Sevilla 92. *La Época*.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago de Chile: CLACSO – Editorial ARCIS.
- Garretón, M. A. (2001). "Aquí nadie ha traicionado a nadie". Entrevista de Faride Zerán. *Rocinante. Arte, Cultura y Sociedad* (31).
- Garretón, M. A. (1994). *La faz sumergida del iceberg: estudios sobre la transformación cultural*. Santiago de Chile: Cesoc - Lom Ediciones.
- Goyenechea, M. (2014). "¿Reforma estructural en salud o regulación del negocio?". *Cuadernos de Coyuntura*, (5), pp. 16-25.
- Huneus, C., Cuevas, R., & Hernández, F. (2014). "Los centros de investigación privados (think tank) y la oposición en el régimen autoritario chileno". *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 23(1), pp. 73-99.
- Jara, M. (2017). "Importando (neo)liberalismo en Chile: el caso del Centro de Estudios Públicos (1980-1990). Un proceso de legitimación intelectual". Mar del Plata, Buenos Aires: *Actas de las XVI Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia*.
- La Segunda. (4 de Julio de 1991). Con iceberg de 60 toneladas Chile se promoverá como país serio, frío y confiable en Sevilla 92. *Diario La Segunda*.

- Larroulet, C. (2008). "The battle of ideas in Chile: the case of Libertad y Desarrollo". En M. Dyble. *Taming Leviathan. Waging the war of ideas around the world*. Londres: The Institute of Economic Affairs, pp. 64-78.
- Lavín, J. (7 de Agosto de 1988). Chile: ¡Adiós Latinoamérica! *Diario El Mercurio*.
- Maillet, A., González-Bustamante, B., & Olivares, A. (2016). "¿Puerta giratoria? Análisis de la circulación público-privada en Chile (2000-2014)". Santiago de Chile: *Serie Documentos de trabajo PNUD - Desigualdad*, N° 2016/07.
- Martínez, J. & Tironi, E. (1985). *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970-1983*. Santiago de Chile: SUR Ediciones.
- Morales, M. (2014). "Nueva Gestión Pública en Chile: orígenes y efectos". *Revista de Ciencia Política*, 34(2), pp. 417-438.
- Moulian, T. (1997). *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Moulian, T. (1998). *El consumo me consume*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Ominami, C. (2009). *El debate silenciado: un testimonio, 1995-2009*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Orellana, V. & Miranda, C. (2018). "La mercantilización de la educación en Chile". En Orellana, Víctor. (ed.). *Entre el mercado gratuito y la educación pública*. Santiago de Chile: Lom Ediciones – Fundación Nodo XXI, 2018, pp. 95-156.
- Orellana, V. & Guajardo, F. (2014). "Los intereses privados en la educación chilena: entre el afán lucrativo y el ideológico". *Cuadernos de Coyuntura*, (3), pp. 31-41.
- Otano, R. (2005). *Nueva crónica de la transición*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Pinedo, J. (2000). "Pensar en (la) transición. Intelectuales chilenos durante el proceso de transición a la democracia, 1990-1999". *Universum*, (15), pp. 189-232.
- Pizarro, Ana. (13 de Octubre de 1991). Todos los Chile: Chile. *Diario La Época*.
- Puryear, J. (2016). *Pensando la política. Intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988*. Santiago de Chile: Uqbar Editores.
- Ruiz, C. (2019). *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Ruiz, C. (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Ruiz, C. & Boccardo, G. (2015). "¿América Latina ante una nueva encrucijada?". En Bretoni, M., Charry, C. y Pastor, J. (Eds.). *Anuari del Conflict Social 2014. Observatori del conflicte social*. Universidad de Barcelona, pp. 765-783.
- Ruiz, C. & Boccardo, G. (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago de Chile: Ediciones El Desconcierto - Fundación Nodo XXI.
- Sanhueza, J. & Carvallo, F. (2018). "Conflictos y transformaciones en la educación superior chilena". En Orellana, V. (ed.). *Entre el mercado gratuito y la educación pública*. Santiago de Chile: Lom Ediciones – Fundación Nodo XXI, pp. 209-258.
- Subercaseaux, B. (1 de Septiembre de 1991). Chile: ¿un país moderno? *Diario La Época*.
- Tejeda, G. (8 de Septiembre de 1991). Hielos mentales en la cultura chilena. *Diario La Época*.
- Tironi, E. (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las élites: Chile en el cambio de siglo*. Santiago de Chile: Grijalbo.